

THE CANADIAN PRESS/JONATHAN HAYWARD



El primer ministro de Alberta Ed Stelmach (izquierda) y el de Columbia Británica Gordon Campbell (centro) firmaron un nuevo pacto de libre comercio e inversión. El primer ministro de Saskatchewan Brad Wall (derecha) finalmente no lo suscribió.

Canadá elimina con cautela las barreras al comercio interno

Los partidarios de la medida afirman que las ventajas económicas serán enormes

POR WILLIAM DYMOND

LOS PARTIDARIOS DEL LIBRE comercio en todas las provincias de Canadá quieren poner tanto al comercio interno como a las restricciones a las inversiones en la sala de los dinosaurios de un museo. Los proteccionistas replican que la reciente propuesta de libre comercio interno —ya adoptada por las provincias de Alberta y Columbia Británica— también debería estar en esa misma sala de depredadores de museo.

Una de las contradicciones en las políticas públicas canadienses en los primeros años del siglo XXI es el compromiso de liberalización del comercio internacional combinado con la pertinaz resistencia de las barreras internas al comercio. Desde que se instituyó el sistema de comercio global hace 60 años, Canadá se ha mantenido a la vanguardia en la formulación de normas para los tratados de comercio global y las negociaciones de carácter comercial. Durante la década de 1980, Canadá aceptó los acuerdos de comercio bilateral como complementarios al sistema multilateral, primero con los Estados Unidos y después con México y otros países más. Sin embargo, el avance en la reducción de la tremenda variedad de barreras internas ha sido muy lento.

El nuevo acuerdo que vincula a dos provincias occidentales es el Acuerdo de

Comercio, Inversión y Movilidad de Mano de Obra entre Columbia Británica y Alberta (conocido como TILMA, por sus siglas en inglés).

El Conference Board de Canadá un equipo de expertos de tendencia moderada, consideró que el acuerdo era “un paso prometedor”.

Crea un mercado más grande

El 15 de abril, Ron Stevens, viceprimer ministro de Alberta y ministro de Relaciones Internacionales e Intergubernamentales, señaló que “el TILMA crea la segunda economía más importante de Canadá, un mercado de casi ocho millones de personas. Significará el acceso perfecto a un rango más amplio de oportunidades a lo ancho de todos los sectores de la economía”. Stevens hizo esta declaración después de que fuera introducido el Proyecto de Ley 1 en la legislatura de Alberta, una ley que eliminará la necesidad de que las empresas estén registradas en ambas provincias y no exigirá ciertos requisitos a los reguladores de energía para que el TILMA pueda entrar en vigor.

La Asociación de Municipios de Columbia Británica (UBCM, por sus siglas en inglés) teme que el acuerdo imponga límites a las compras, restrinja el poder de

los gobiernos locales para distribuir subvenciones y préstamos. Asimismo, le preocupa que plantee posibles impedimentos para los proyectos de protección ambiental de las ciudades y los pueblos. Hay quienes argumentan que el TILMA tiene poco o nada que ver con el comercio entre provincias y, en cambio, elimina medidas que fueron establecidas para atender a una amplia población o con fines sociales. También hay quienes sostienen que el TILMA podría obligar a Columbia Británica a levantar la prohibición de comida chatarra en escuelas públicas.

La provincia da marcha atrás

El Gobierno del Partido Saskatchewan, recién electo en Saskatchewan, provincia vecina del este de Alberta, se ha retractado de su declaración previa a favor de unirse al pacto comercial debido al impacto negativo en ciertos incentivos fiscales y en las subvenciones a empresas de propiedad provincial.

En 2008, Canadá tiene el compromiso de liberalizar su comercio internacional, aunque al interior conserve las barreras al comercio. Durante la década de 1980, Canadá les dio la bienvenida a los acuerdos de libre comercio bilaterales como complemento del sistema multilateral, inicialmente con los Estados Unidos y extendiéndolos después a México y a varios otros países. Resultaba extraño que la liberalización comercial exterior estuviera en contradicción con la persistencia de

William Dymond es investigador de alto nivel del Centro de Políticas y Derecho Comerciales de la Universidad de Carleton, Ottawa, y se desempeñó como director de dicho Centro entre 2000 y 2003.

las barreras comerciales que dividen a las provincias en el interior del país.

El acuerdo comercial entre Alberta y Columbia Británica entró en vigor el 1º de abril de 2007, como consecuencia de la frustración de los dos gobiernos por el lento progreso logrado en virtud de acuerdos previos en un intento por derribar las barreras comerciales entre las provincias de todo Canadá. Se trata de un acuerdo económico bastante integral que abarca las áreas de energía, agricultura, transporte e inversión.

Mediante el TILMA se garantiza que los títulos y licencias expedidos en una provincia sean reconocidos en ambas. Las normas y estándares que impiden el comercio serán armonizadas y no se impondrán nuevas normas restrictivas. Además, el nuevo pacto comercial estipula que no debe existir discriminación en las compras gubernamentales de aquellos artículos con valor de 10 000 dólares canadienses o más, así como en los servicios no profesionales por 75 000 dólares canadienses o más, o en las construcciones con un costo de 100 000 dólares canadienses o más.

Incluso los automóviles adquieren mayor movilidad

Estos requisitos también se aplicarán a las organizaciones públicas, como las empresas de la Corona (que pertenecen al gobierno), así como a los gobiernos locales, a partir del 1º de abril de 2009. Al amparo de este acuerdo, los automóviles registrados en una provincia podrán operar mediante un registro temporal en la otra provincia.

Los subsidios distorsionantes que pudieran significar una ventaja competitiva para una de las partes quedan prohibidos por el TILMA. Los subsidios están permitidos en algunos sectores, como la investigación académica, las organizaciones no lucrativas, la ayuda de emergencia compensatoria en casos de desastres naturales y los editores de libros, revistas, películas y sonido.

El 5 de diciembre de 2007 se aprobó la legislación en Alberta que prevé que la resolución que se dé a las disputas tenga carácter obligatorio. De acuerdo con Guy Boutilier, ministro de Relaciones Internacionales, Intergubernamentales y de Asuntos Indígenas de Alberta, "la legislación dicta que las resoluciones del panel de disputas del TILMA deberán cumplirse. Realmente será efectiva".

Si el gobierno que haya cometido la falta no cumple con la petición de cambiar la política pública en cuestión, podrá ser multado por un máximo de 5 millones de dólares canadienses; los costos del panel serán pagados por la parte perdedora.

EL TILMA amplía e implementa un acuerdo previo similar. En 1995, el gobierno federal, las provincias y los territorios celebraron el Acuerdo sobre Comercio Interno. Con ese acuerdo (que los economistas conocen con el nombre de AIT, por sus siglas en inglés) Canadá reconoció que tendría que reducir las barreras comerciales internas para alcanzar todos los beneficios del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos de 1989 y del pacto subsiguiente de 1994, el TLCAN.

Las medidas aumentan el comercio

Además del AIT y el TILMA, existen otros arreglos vigentes que se ocupan del comercio interno. A saber:

- el Acuerdo Marco de Unión Social, suscrito por todas las provincias y territorios, excepto Quebec, en 1999, con el propósito de apoyar la movilidad de la mano de obra y no crear nuevas barreras a través de iniciativas de política social;
- el Foro de Ministros del Mercado de Trabajo, formado en 1983 para fomentar la cooperación en el mercado de trabajo; y
- el Programa de Normas Interprovinciales Sello Rojo que se propone aumentar la movilidad de trabajadores calificados en sus oficios dentro de Canadá, y existe desde hace más de 45 años. Bajo el programa Sello Rojo, los trabajadores cuentan con estándares válidos en todo Canadá y un examen de validez nacional. El objetivo es eliminar la necesidad de que los trabajadores deban tener nuevas capacitaciones cuando pasan de una provincia a otra.

La industria de la construcción de Quebec ha estado mucho más regulada que la de Ontario, lo que plantea problemas a los trabajadores de Ontario que quieren trabajar en Quebec. En 1999, Ontario perdió la paciencia y promulgó la ley llamada "Lo que es justo de un lado es justo en el otro". Esta provincia estaba harta de que los trabajadores de la construcción de Quebec cruzaran a raudales el Río Ottawa para trabajar sin restricciones en Ottawa, mientras que los trabajadores de la construcción de Ontario tenían dificultades para trabajar en Quebec. Esta ley excluyó a los trabajadores de la construcción de Quebec de los proyectos gubernamentales de Ontario y los obligó a registrarse en la Oficina de Protección del Empleo. Con el tiempo, las dos provincias hicieron las paces mediante la suscripción del Acuerdo de Movilidad de Mano de Obra en el Sector de la Construcción.

El argumento en contra de las barreras internas al comercio y a la movilidad de la mano de obra es que dan apoyo a los

intereses políticos a costa del crecimiento económico. Con frecuencia anunciadas como medio de protección del empleo y de creación de riqueza, tienen el efecto contrario, dicen sus opositores, de empobrecer tanto a las provincias que las mantienen como al país en su conjunto.

El Artículo 91 de la Constitución canadiense confiere al gobierno federal autoridad exclusiva para la regulación del comercio. En 2007, el gobierno federal dijo que "consideraría cómo usar la potestad federal sobre el comercio para hacer que nuestra unión económica funcione mejor para los canadienses". El razonamiento del gobierno es claro. Como lo señala deliberadamente el discurso: "a pesar de la globalización de los mercados [...] a menudo es más difícil trasladar bienes y servicios a través de las fronteras provinciales que a través de nuestras fronteras internacionales".

La invocación de una facultad en disputa

Invocar la facultad constitucional sobre comercio sería un reto formidable para el gobierno federal. En los primeros años de la Confederación, las decisiones de la Corte limitaron severamente esta facultad con una generosa interpretación de la autoridad provincial sobre la propiedad y los derechos civiles. De ahí que, si el gobierno recurriera a esta facultad constitucional, tendría que hacerlo muy cuidadosamente.

Los partidarios del TILMA instan a las provincias al este de Alberta y Columbia Británica a adoptar ese modelo lo más pronto posible. Hacen mención del acuerdo de noviembre de 2007 entre los primeros ministros de Ontario y Quebec, Dalton McGuinty y Jean Charest, para que se inicien las negociaciones de un acuerdo comercial entre las provincias como el siguiente paso hacia el libre comercio en todo Canadá.

Canadá tuvo la opción de contribuir tanto a la creación de normas de comercio internacional como a la negociación de menores barreras comerciales, o permanecer al margen y conservar su soberanía sobre las barreras al comercio. En el plano internacional, se inclinó por unirse al mundo; en el ámbito interno, se mantuvo al margen.

El resultado de lo anterior es que no ha podido cosechar todos los beneficios económicos derivados de las normas del comercio mundial y de la reducción global de las barreras comerciales. Ha llegado el momento, como lo reconocieron Alberta y Columbia Británica, de decidirse a modificar las políticas públicas y aumentar los resultados económicos futuros. 